



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: MARÍA DEL CARMEN HENAO ZULETA
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 024 2021 00019 01
Sentencia: S-314

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada de la demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín el día 1 de marzo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

MARÍA DEL CARMEN HENAO ZULETA demandó a la ACP COLPENSIONES para que sea condenada a reconocerle y pagarle la pensión de vejez a partir del 28 de mayo de 2019, así como los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 28 de mayo de 1962, por lo que cumplió 57 años de edad el mismo día y mes del año 2019; que en el año 1981 estuvo vinculada al servicio del Municipio de Entreríos; que en 1982 se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones para los riesgos de invalidez, vejez y muerte; que laboró para varios empleadores entre 1995 y el año 2001, pero en la historia laboral de COLPENSIONES no aparecen reflejados los aportes a pensión; que también realizó cotizaciones como independiente entre el mes de enero de 2002 y diciembre de 2018, lo que tampoco son tenidos en cuenta; que solicitó la corrección de historia laboral pero tales períodos siguen sin aparecer; que estuvo afiliada a PROTECCIÓN S.A. luego de su vinculación en 1994, pero antes de cumplir los 47 años de edad se trasladó nuevamente al Régimen de Prima Media; que solicitó la pensión de vejez el 12 de marzo de 2021, la cual fue negada según Resolución SUB 77146 del 25 de marzo de 2021; y que en total tiene cotizadas 1439.31 semanas de cotización, incluyendo 593.31 que COLPENSIONES está desconociendo.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación a esa entidad y todo lo relacionado con la solicitud de pensión de vejez y la decisión de negar lo pretendido. Frente a lo demás señala que no le consta y que deberá ser probado en el proceso. Se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento fáctico y legal y no reunir el número de semanas de cotización que exige la ley para el reconocimiento de la pensión de vejez. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A., vinculada en calidad de interviniente según auto del 31 de mayo de 2021, contestó la demanda indicando que las pretensiones de la demanda no están dirigidas en su contra y se desconocen los hechos que la fundamentan. Agrega que la afiliación de la demandante con esa entidad no se encuentra activa y los aportes realizados fueron trasladados a COLPENSIONES desde el 30 de septiembre de 2004. Como excepciones propuso buena fe, hecho exclusivo de un tercero, prescripción, compensación, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, falta de legitimación en la causa por pasiva y traslado de la totalidad de los aportes a COLPENSIONES.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 1 de marzo de 2022, el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante, a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$200.000 a favor de cada entidad.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la demandante presentó recurso de apelación indicando que en su momento se allegaron las auto liquidaciones de aportes a pensión a la AFP PROTECCION S.A., por lo que solicita se revoque la decisión de primera instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, la apoderada del demandante presentó alegatos de conclusión a través de los cuales insiste en la solicitud de revocatoria de la sentencia de primera

instancia por considerar cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003 para el reconocimiento de la pensión de vejez.

CONSIDERACIONES:

Con relación a la necesidad de sustentar adecuadamente el recurso de apelación como medio de impugnación de las providencias judiciales, que guarda íntima conexidad con el principio de la consonancia, el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, ordena al *ad quem* ceñir su estudio en segunda instancia sólo a las materias respecto de las cuales el apelante haya manifestado inconformidad y cumplido con la carga procesal de fundamentar sus reparos. Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la de julio 07 de 2009, radicación 32960 o la SL 2764 del 22 de febrero de 2017, rad. 47692. En esta última explicó:

"(...) el principio de consonancia consiste en que, entre la sentencia de segunda instancia y el objeto del recurso de alzada, debe existir plena correspondencia, lo que significa que, en principio, al juzgador le está vedado apartarse de las materias que le propone el recurrente.

Por ello, el impugnante está igualmente obligado, entre otros deberes procesales, a formular su recurso con la indicación precisa de las materias que le objeta a la decisión del juez de primer grado, porque de no ser así, se asume que está de acuerdo con lo que deja libre de ataque. Es de esperarse, desde luego, que el ejercicio de ese derecho de defensa se asuma con el rigor de explicarle al superior cuáles son los fundamentos del disenso, a través de una argumentación jurídica y/o fáctica, según corresponda, coherente y suficiente para la resolución del asunto."

Con la presente acción judicial, la señora MARÍA DEL CARMEN HENAO ZULETA pretende el reconocimiento de la pensión de vejez a su favor desde el 28 de mayo de 2019, por considerar que desde ese entonces tiene cumplidos los requisitos que exige la Ley 797 de 2003 respecto a las semanas mínimas de cotización que son 1300 y la edad de 57 años, cotizaciones realizadas con empleadores privados y como

independiente, muchas de ellas desconocidas por COLPENSIONES en su historia laboral, pero que en total suman un total de 1439.31 semanas.

En orden a examinar el planteamiento que efectúa la parte actora, limitado a que con la demanda se aportaron las autoliquidaciones de aportes a la AFP PROTECCIÓN S.A., es preciso indicar, inicialmente, que lo relacionado con la edad de la señora HENAO ZULETA – 57 años cumplidos - no se discute, pues así lo acepta COLPENSIONES al momento de contestar el hecho primero de la demanda y así se constata con algunos documentos aportados como anexo, en los que consta que nació el 28 de mayo de 1962, lo que significa que desde el mismo día y mes del año 2019 tiene cumplido dicho requisito.

La cuestión radica en el número de semanas cotizadas, dado que la entidad negó su solicitud pensional por considerar que el total durante toda su vida laboral era de apenas 843, mientras que en la decisión del juzgado se consideró que ese total correspondía a 1221.42 semanas, las que de todas maneras siguen siendo insuficientes para lo pretendido.

En realidad, la historia laboral actualizada de COLPENSIONES muestra que el total de cotizaciones realizadas por la demandante es de 1173 semanas, lo que significa que muchas de las inconsistencias que se discutían desde el escrito de demanda ya han sido subsanadas, como las cotizaciones que se reclamaban con COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, con SEMINARIO MISIONERO, con CONFECCIONES BALALIKA, con CIRO GARCÍA ARBEY o con PELÁEZ NARVÁEZ DIANA MARÍA. Incluso, el Juzgado de primera instancia hizo un análisis detallado de cada período y encontró la posibilidad de incluir 30.57 semanas adicionales por los periodos de junio a diciembre de 1994 y por el ciclo de mayo de 2000.

Sin embargo, existe otro grupo de aportes discutidos que corresponden a cotizaciones que según la demandante fueron realizadas como independiente de manera intermitente entre los años 2002 y 2018. De ellas se pudo verificar que las de noviembre y diciembre de 2012, las de octubre y noviembre de 2014, así como las de noviembre y diciembre de 2018, ya están correctamente aplicadas en la historia laboral.

En los demás casos no será posible contabilizar las semanas ya que, contrario a lo que sostiene la recurrente, no existe prueba alguna que de cuenta de la realización de los pagos respectivos.

Es sabido que en el proceso judicial corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que fundamentan sus pretensiones, o sus excepciones, según sea el caso, de acuerdo con los lineamientos normativos que en materia procesal gobiernan el debate probatorio, esto es, el artículo 167 del Código General del Proceso que dispone: *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"* o bien el 1757 del Código Civil según el cual *"Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta"*.

Es así como la demandante tenía la obligación de acreditar el pago de las cotizaciones como independiente por los periodos de enero de 2002 a diciembre de 2003; octubre a diciembre de 2004; octubre a diciembre de 2005; octubre a diciembre de 2006; julio a diciembre de 2007; abril de 2008 a diciembre de 2009; abril de 2010 a junio de 2011; abril a diciembre de 2012; junio, septiembre y octubre de 2013; septiembre y diciembre de 2014; y marzo y junio de 2015.

En ninguno de tales casos hay prueba del pago del aporte a pesar de que en ello se insista a través del recurso de apelación y en los alegatos de conclusión radicados en esta instancia. La prueba documental que obra como anexo de la demanda no incluye las

planillas de auto liquidación de aportes por esos períodos, así como tampoco soporte alguno de la realización de dichos pagos.

Lo que incluye es la respuesta de COLPENSIONES a la solicitud de corrección de historia laboral en donde se le explica a la afiliada que no ha sido posible evidenciar afiliación o pagos a su nombre por esos períodos, así como los extractos de la cuenta de ahorro individual de la señora MARÍA DEL CARMEN entre los años 2000 y 2011, que de ninguna manera pueden equipararse a una planilla de auto liquidación de aportes.

Además, se evidencia de esos documentos, visibles entre las páginas 15 y 48 del archivo denominado 02demandaAnexos del expediente digital, que los periodos que se reclaman con la demanda no registran cotización alguna. La información que se refleja por esos ciclos contiene la descripción que dice "*Comisión administración de recursos afiliados cesantes*", que es una deducción que hace la AFP por concepto de gastos de administración precisamente derivada de la situación de cesante del afiliado, es decir, por tener la condición de no cotizante.

De ninguna manera puede interpretarse que esos valores que se registran en esos períodos corresponden a una cotización como independiente, más aún cuando no existe información acerca de la razón social del cotizante, el número de días que se reportan, el valor del IBC, entre otros, pues precisamente lo que ocurre es que no hubo aportes en ese tiempo y simplemente el registro que queda en la historia laboral es de la deducción que se hace por la condición de cesante, así como el valor de los rendimientos financieros que cada trimestre se generan.

En consecuencia, no existen elementos que permitan a la Sala tener en cuenta un número de semanas adicional a las que dijo la

funcionaria de primer grado y por ende la decisión absolutoria que se adoptó deberá ser confirmada en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de COLPENSIONES, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$500.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Medellín el día 1 de marzo de 2022.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de COLPENSIONES, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$500.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ea002b7cec7915c26d0713a1f3f6be0b3bb4e8dc69094640d7591ff4d6a4318b**

Documento generado en 23/11/2022 02:01:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>